

## Informe de coyuntura y proyección abril de 2022

### I. Labor senatorial.

El senador Pedro Araya ha reanudado su presencia en los medios de comunicación, volcándose a los temas de mayor interés ciudadano:

- **Un sistema político sin arquitectura:** El senador Pedro Araya dio su opinión crítica sobre el estado del debate en la Convención.
- “Cuando uno mira lo que está pasando en el conjunto de la Convención, mi impresión es que hay un problema bastante serio. Hay mucho eslogan que se vota en las comisiones y que probablemente va a quedar plasmado en la nueva Constitución, pero que no soluciona los problemas y que al final del día va a generar, o va a ser, una fuente interminable de conflicto. Y no es solo lo que ocurre con el Senado, basta ver las propuestas de normas para el Poder Judicial y del Ministerio Público”.
- “La Convención legítimamente puede proponer suprimir instituciones, crear o modificar instituciones, el problema no es ese. El problema está en que hoy día uno cuando mira lo que se ha aprobado hasta este minuto no hay una arquitectura respecto del sistema político, judicial, de gobierno o derechos fundamentales, entonces al final del día lo que estamos teniendo es una verdadera majamama que no pega ni junta y que va a terminar, a mi juicio, dándole mucha inestabilidad al país”.
- “En el Congreso hay una gran diferencia, ahí existen varios contrapesos respecto de lo que se hace o se deja de hacer, por lo pronto, un sistema bicameral; por lo tanto, lo que haga una u otra cámara está controlado por la cámara revisora. En segundo lugar, el Ejecutivo tiene el control a través de las urgencias y los vetos presidenciales y existe otro control que es el Tribunal Constitucional y, eventualmente, en algunos casos el Poder Judicial”.
- “La gran diferencia es que hoy día hay un contrapeso que está construido y que permite que en el caso de que alguna cámara, de Diputados o del Senado, quiera ir más allá de sus atribuciones, o respecto de algo que no le corresponde, existen los contrapesos suficientes, a través del propio Poder Legislativo, el Ejecutivo o el TC. Esa es la gran diferencia”.
- “En el Congreso hay contrapesos suficientes para cuando alguna cámara quiere hacer alguna tontera y eso ha quedado demostrado en distintas tramitaciones de proyectos de ley, o sea, por lo pronto, decir que muchos convencionales constituyentes están sentados ahí gracias al Senado, porque hay que recordar que la Cámara de Diputados rechazó una serie de normas que permitían que varios convencionales pudieran llegar y eso fue corregido en el Senado, como lo de los independientes y pueblos originarios. Por eso uno dice que hay mucho de eslogan en lo que se está haciendo. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo del Ministerio Público, yo no conozco ningún país con el modelo que se está proponiendo, el que está destinado al fracaso”.
- En cuanto a la idea de cambio del fiscal nacional por un consejo: “Eso al final del día no va a permitir tener una persecución penal eficaz y en eso uno

esperaría que los convencionales escucharan más a las personas que conocen el tema. No he escuchado a ningún académico, experto o persona conocedora del tema procesal penal que esté apoyando esta iniciativa, porque es una verdadera locura. También sería bueno que los convencionales miraran la regulación que existe de la minería en Chile, hay mucho eslogan en eso también”.

- “Eso demuestra un profundo desconocimiento del sistema procesal penal. Yo invitaría a los convencionales a mirar la Ley Orgánica del Ministerio Público. El fiscal nacional es jefe del servicio, pero cada fiscal regional es autónomo en la toma de sus decisiones. El fiscal nacional no puede imponer una decisión al fiscal regional o local. El fiscal nacional lo que hace es fijar ciertos lineamientos respecto de la administración o criterios, pero en la práctica, cada fiscal regional toma las decisiones que estime pertinentes. Eso es una falencia; soy un convencido de que el fiscal nacional, al contrario, debiera concentrar más poder en la toma de decisiones. Eso demuestra que hay un profundo desconocimiento. Por eso digo que en la Convención hay mucho de eslogan, mucho de decir cosas por redes sociales, pero cuando uno entra a analizar el detalle se da cuenta de que aquí se están cometiendo profundos errores, los que tienen que ver con que no está construyendo una adecuada arquitectura institucional y todos hemos visto que estos modelos constitucionales han llevado a la inestabilidad y al fracaso de varios países.
- Explicaciones de por qué la Convención está decidiendo como lo hace: “Creo que se cruzan varias situaciones. Primero, creo que en la Convención hay algunos que quieren dar una suerte de golpe blanco. Con esta especie de manto de que somos una Convención Constitucional, quieren destruir buena parte de la institucionalidad del país sin proponer una salida alternativa a Chile, respecto de cómo mejorar y abordar las instituciones. En segundo lugar, probablemente hay un sector, por lo que se ha visto en los debates, de mucho revanchismo respecto de lo que ha sido el modelo institucional de casi 40 años. Eso, creo, ha atentado contra un buen trabajo en la Convención”.
- “Lo que tenemos es una serie de movimientos o personas que dicen representar ciertos movimientos que son difíciles de encasillar en lo que tradicionalmente uno podría definir como bloque político”.
- Consultado si correspondería inhabilitarse en el debate sobre el Senado: “Si esto solo girara en torno al Senado, ahí sí, pero cuando uno mira lo que pasa con las otras instituciones hay un patrón que se repite y eso es lo que preocupa. Lo mismo pasa en el Ministerio Público, por buenaventura algunos convencionales entraron en razón y se rechazó la verdadera locura que era la propuesta del sistema judicial que se estaba haciendo y no lo digo como senador, sino como abogado, como una persona que conoce el funcionamiento del sistema judicial, que lo he estudiado, porque es una materia que me gusta; lo que se estaba proponiendo en sistema judicial es una verdadera locura que, además, está abandonado en otros países. Cuando uno mira lo que se está haciendo, uno no ve que haya una arquitectura que diga, mira, aquí están los pesos, los contrapesos, facultades, deberes; hay un verdadero enredo que no se logra entender. Al revisar en lo propuesto en forma de gobierno, yo soy un convencido de la descentralización y la regionalización y creo profundamente

en ello, pero el modelo que se está proponiendo es un verdadero pegoteo de distintas cosas que se han hecho en otros países que tampoco van a resultar quizá en Chile. Eso va a traer una tremenda frustración”.

- “Los convencionales, ninguno ha señalado siquiera cuánto va a costar en dinero implementar estas reformas. No se ha dicho cuánto cuesta esto y puedo aventurar, por la cantidad de instituciones que se está pensando crear y sus funciones, que esto va a ser una millonada de plata que hoy día el país no está en condiciones de soportar económicamente. Esperaría que la Convención fuera responsable y dijera miren, esto va a costar tanto en dinero, porque si no, lo que va a ocurrir es que tendremos una Constitución que no se va a poder implementar durante mucho tiempo”.
- “Además, cuando uno mira lo que se está proponiendo, casi todas las disposiciones dejan que deberán ser reguladas por la ley. Ante la cantidad de leyes nuevas que tendrán que ser dictadas, entonces ¿cuál sería el horizonte de vigencia real de una nueva Constitución si queda todo entregado a un mandato legal? En la práctica, vamos a tener una Constitución de puras declaraciones que se van a implementar varios decenios después”.
- “Hay mucho eslogan. Se dice que el Senado se ha opuesto a los cambios en Chile; por favor, cuántos convencionales están sentados ahí gracias al Senado o cuántos temas ha corregido el Senado; por ejemplo, el gran impulsor de las ayudas sociales que recibieron los chilenos en pandemia fue el Senado durante la presidencia de Yasna Provoste (DC), cuando se generaron los mínimos comunes en el gobierno de Sebastián Piñera”.
- “Si se propone un sistema que no va a funcionar y que va a llevar al fracaso al país a mí me preocupa, más que estar pensando si voy a postular o no, respecto de qué se hace para evitar esa situación. Esto no ocurre solo con el Senado, mire lo que pasa con otros temas como el derecho de propiedad y ni hablar en los temas previsionales. Hay una sentida aspiración de millones de chilenos de que se consagre que los dineros son de carácter individual y son del trabajador y eso no lo está haciendo la Convención”.
- “En una forma muy oblicua nos dicen que no se van a tocar los fondos previsionales, pero cuando uno mira lo que se está consagrando, se ve un sistema que eventualmente permitiría la expropiación de los fondos previsionales. En eso debe dar claridad la Convención y en eso creo que la Convención ha tratado de pasar piola en este debate y tratar de centrarlo en el Senado y en el Ministerio Público, pero en el tema de los fondos previsionales, la Convención está tratando de que pase lo más piola posible. La Convención está tirando bombas de humo ante el tema de los fondos de los trabajadores y por eso se enfrasca en peleas con el Senado, el Poder Judicial o el Ministerio Público”.
- Sobre el modelo de sistema judicial en debate: “La forma como se está diseñando el sistema judicial está lejos de garantizar la independencia de los jueces y el buen funcionamiento del sistema judicial. No se logra vislumbrar con claridad cuál es el diseño institucional que hay detrás del sistema judicial y cuáles serán los contrapesos reales que tendrá el consejo de la justicia. Si acá no se construye una Constitución que sea la casa común de todos, y en donde efectivamente exista una arquitectura institucional que garantice el desarrollo

de Chile y de las personas, va a haber que restarle dramatismo si este proceso fracasa y tendrá que proponerse un nuevo modelo para un próximo proceso constitucional si este llega a fracasar”.

- **Se vino marzo, ahora llegó abril y se nos apareció el 10%.** Pedro Araya, entregó este artículo a la publicidad a principios de mes.
- “Queramos o no la discusión respecto del derecho a retiro de fondos desde las cuentas de capitalización individual, que administran las AFP, por parte de los trabajadores y afiliados al sistema privado de pensiones, sigue abierta en nuestro país. Ello unido a la reiterada oposición a dicho mecanismo por parte del Gobierno que contribuí a elegir, creo será casi un trauma kármico para el Presidente Gabriel Boric, y para nuestro Ministro de Hacienda Mario Marcel, de no enfrentar ambos con racionalidad, diálogo y realismo este tema. Por cierto, con mucha, pero mucha Política, atributo manifiestamente deficitario en estos primeros 20 días de nueva gobernanza”.
- “En efecto, el gobierno anterior partió en este tema siempre con las palabras oposición y rechazo, usó y abusó de la estigmatización temática, y terminó en un nivel de enredo, confusión, inconsistencia y desprestigio que lo llevó, incluso, a presentar y aprobar una iniciativa del propio Presidente Sebastián Piñera sobre la materia, a amenazar reiteradamente con recurrir, y efectivamente interponer requerimiento, ante el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad y a dar palos de ciego en un tema que mi experiencia, en varios años de tramitación de los diversos proyectos de reforma constitucional sobre la materia, me ha llevado a concluir que los caminos del gobierno anterior no son el camino, que el actual gobierno no puede pretender tal caótico derrotero y que es preciso construir entre todos una alternativa realista y de beneficio país que con mi equipo más directo, y a quienes agradezco su esfuerzo y dedicación, conocidos y amigos pro bono incluidos, hemos ido desarrollando y que creo conveniente colocar a disposición del país y de este debate que parece no terminar nunca”.
- “El primer objetivo, a nuestro juicio, de estas nuevas iniciativas sobre derecho a retiro de fondos, debe ser el ser capaces de legislar una herramienta constitucional que permita un cierre definitivo de esta discusión, de manera de poder centrarnos en el fondo del problema que no es otro que la construcción de un sistema de pensiones con real contenido de seguridad social, donde la capitalización de nuestros ahorros sea un medio para incrementar los mismos, pero no el modo de su apropiación por terceros ni menos su fin último el de exclusivo sostén y desarrollo del mercado de capitales, aunque su existencia, en la práctica, ayude a ello y a su profundización”.
- “El segundo objetivo debe ser el de ser capaces de determinar, con inteligencia y precisión, la finalidad adecuada que debe darse al derecho a retiro, de manera que sea verdaderamente contributivo para nuestra ciudadanía y no un exclusivo insumo de temporalidad para cubrir legítimas contingencias, pero debilitador en extremo de nuestros ahorros necesarios para enfrentar mejor una vejez inminente para todas y todos”.
- “Nótese que hablamos de “derecho a retiro”, y no de retiro a secas, pues tenemos la más absoluta convicción que en la medida que reconozcamos el

retiro como un derecho de todo afiliado, sentamos sólidas bases para una solución definitiva, terminando con los mismos debates, las mismas argumentaciones y el agotamiento de preciosas horas legislativas, efectivamente más fecundas en la generación de un robusto sistema de pensiones que en el vaciamiento de los significativos recursos del actual, amén del potencial de creación de normas jurídicas de impactos impredecibles dada la cada vez mayor creatividad legislativa”.

- Pero ¿es posible lo anterior?, se preguntarán quienes leen esta columna. ¿Se podrán alcanzar los dos objetivos planteados precedentemente? La respuesta es sí, es posible; y sí, se pueden alcanzar los dos objetivos, pero ello requiere, reitero, aunque sea majadero, que el gobierno no repita el derrotero de su antecesor que, como bien sabemos, condena al fracaso cuando no a una contradicción, incoherencia y desprestigio evidentes, ello por no ser dicho camino contributivo al desafío natural de la política que es, precisamente, un arte en la búsqueda del bien común.
- Desde ya, y sabedores de lo disruptivo que resulta en toda época, y aún más en estos tiempos, la tentación de recurrir al mecanismo de los quóruns supra mayoritarios como una especie de candado para poner término a nuevas iniciativas de retiros de fondos desde las AFP, ello toda vez que más que una solución legislativa terminaría siendo un elemento de cuestionamiento de la democracia y del trabajo parlamentario, es que creemos imprescindible proponer una solución distinta, pero real y robusta, que poniendo fin a la necesidad de futuras iniciativas legislativas, instale un reforzado reconocimiento sobre la propiedad de nuestros ahorros previsionales y nuestra capacidad de goce y disposición, presente y futura, frente a las necesidades, contingencias y urgencias que la vida depara a todo ser humano, pero con una mínima priorización y conjugación de bien individual y de bien común que, también, desarrollaremos aquí.
- Concretamente, creemos constituye una mejor solución el consagrar una norma constitucional que reconozca el derecho a retiro permanente y automático sobre un determinado porcentaje de la rentabilidad anual sobre nuestros fondos, monto de rentabilidad sobre el que debemos concordar en el debate legislativo, pero que anticipamos como adecuado cuando supere el 7% anual.
- Ello permitiría que todo afiliado y cotizante que anualmente obtenga, por ejemplo, un 8% o más de rentabilidad sobre sus fondos, tendría un derecho garantizado a retiro del 1% o más de su rentabilidad anual sobre los mismos, siendo obligación de la AFP respectiva el traspaso automático a la cuenta dos que el afiliado tuviere, o que la administradora debería abrir para él (sin ningún costo, comisión o impuesto), de todos los respectivos saldos por sobre el piso de rentabilidad anual, piso de rentabilidad garantizada eso sí como de exclusiva finalidad previsional.
- Obviamente lo lógico sería establecer, también, un techo, de manera de armonizar adecuadamente el potencial de ahorro para la pensión futura via rentabilidad con el potencial de retiro por mayor rentabilidad para legítimo goce y disposición presentes.

- Aquí, nuevamente, debemos en el Congreso determinar ese techo, pero nos anticipamos a creer y proponer que un 17% de rentabilidad anual es una buena cifra que permite conjugar satisfactoriamente ambos propósitos. Así, el traspaso permanente y automático de rentabilidad, sólo por sobre un promedio determinado, no debilita el ahorro ni la rentabilidad sobre él para la pensión futura, quedando garantizada su mantención en la cuenta obligatoria y de disposición de largo plazo, produciéndose el traspaso obligatorio y automático a la cuenta dos sólo en el respectivo exceso y rango respectivos.
- En otras palabras, lo máximo que estaría obligada a traspasar a cuenta dos la AFP, en nuestra propuesta, es un 10% de rentabilidad anual sobre los fondos del trabajador, respetando siempre el piso y el techo dichos.
- Esta propuesta, además de poner fin a la necesidad de nuevos proyectos de retiro y a reiteradas discusiones de conocida argumentación en pro y en contra, tiene la virtud de garantizar a perpetuidad el destino exclusivamente previsional y futuro o de largo plazo, por tanto, tanto del ahorro obligatorio de los trabajadores, como del piso mínimo de rentabilidad sobre dichos ahorros (en la propuesta y ejemplo 7%), permitiendo y garantizando sí el goce y disposición presentes sobre una parte razonable de aquella rentabilidad que supere el piso y hasta el techo ya señalados.
- Como bien consta al país, la cuenta dos ya ha sido utilizada en anteriores proyectos de retiro de fondos y creemos es, por lejos, la mejor solución para el trabajador, ello toda vez que permite una operación de traspaso y materialización del derecho a retiro sobre rentabilidad de manera permanente y automática, garantiza luego del traspaso el mismo esquema de administración de cartera y portafolio de inversiones que la administradora puso a disposición de sus afiliados, incluso cuando existe doble elección de fondos, permite el retiro por parcialidades de los fondos respectivos sin pérdidas por cambio de administración a un operador sin misión de rentabilización y no obsta al íntegro traspaso futuro, en cualquier tiempo, a cualquier otro operador financiero, como, tampoco, a su acumulación exclusiva e indefinida, si así lo decidiere el trabajador, para mejorar su pensión futura u otros propósitos.
- **Pensiones de Alimentos.** Lo propuesta precedentemente desarrollada garantiza un cierre virtuoso del tema retiros y avanza en el cumplimiento del segundo objetivo planteado, quedando, a nuestro juicio, pendiente su profundización, esto es, ser capaces de determinar, con inteligencia y precisión, la finalidad adecuada que debe darse al derecho a retiro, de manera que sea verdaderamente contributivo para nuestra ciudadanía y no un exclusivo insumo de temporalidad para cubrir legítimas contingencias, pero debilitador en extremo de nuestros ahorros necesarios para enfrentar mejor una vejez inminente para todas y todos.
- Así y si bien una parte de dicho objetivo ya se cumple con la propuesta, creemos es perfectamente posible ampliarlo y profundizarlo, por tanto, pues si hay un punto de transversal acuerdo en Chile es el que dice relación con las pensiones de alimentos, ello dada su alta y vergonzosa morosidad y la escasa

respuesta legislativa en democracia para enfrentar lo que constituye un problema estructural para el desarrollo y felicidad de miles de familias y niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Tal es así, que es precisamente en esta materia que el retiro de fondos ha sido tremendamente fecundo, al punto de constituir un mecanismo de corrección efectiva y eficiente frente al rezago monstruoso de recursos económicos por acumulación de deuda alimenticia existente en nuestro país.

- Efectivamente, gracias a los tres (3) proyectos de retiro de fondos aprobados por el Congreso, lograron destinarse más de U\$700 millones a solucionar deudas y necesidades que se arrastraban por años, y décadas en muchos casos, generando brechas de sostenibilidad de la economía familiar de un impacto y daño inconmensurables para cualquier sociedad.
- Claramente son los U\$700 millones más virtuosos y mejor recuperados por la vía de los retiros, y que si bien es una suma pequeña en comparación con el global acumulado en nuestras cuentas de capitalización, toda vez que representan menos del 0,5% del total de dichos recursos; como contrapartida de su relevancia y envergadura, esos mismos recursos equivalen a casi dos tercios de la tasa de encaje obligatoria de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
- La triste y cruda realidad que impacta a miles de alimentarios - en su mayoría niños, niñas y adolescentes - que no reciben su pensión, quienes, para julio del año 2020, previo al inicio de los pagos del primer retiro, representaban el 84% de esas pensiones impagas, es un drama del que tenemos la obligación irrenunciable de hacernos cargo de forma definitiva, y en lo personal mi principal motivación para contribuir a este debate.
- Las soluciones de corte penal demuestran ser poco efectivas, los registros públicos de morosos manifiestamente segregadores y más bien mediáticos que contributivos a una solución verdadera, la laceración familiar no es sana para ninguna sociedad y la tardanza del estado en respuestas oportunas y contundentes, eficientes y eficaces, una negligencia impúdica y vergonzosa.
- Todo lo anterior atestigua con creces la importancia de vincular la fórmula de cierre virtuoso del mecanismo de los retiros, con una solución más potente, permanente y de toda justicia respecto de la aún existente deuda morosa por pensiones de alimentos en nuestro país y de la que a futuro inevitablemente se pueda generar, garantizando de paso el pleno cumplimiento de los dos objetivos inicialmente planteados en esta columna.

- Concretamente, sobre la base de la fórmula de cierre precedentemente expuesta, y no condicionando el derecho a retiro permanente y automático de fondos dado que está diseñado como un mecanismo de disponibilidad presente de ahorros previsionales que se mantienen, mediante el traspaso a la cuenta dos, en la esfera de administración de la AFP y bajo las mismas reglas que regulan esa administración, dicha fórmula sí permite condicionar la salida y egreso efectivo de dichos recursos, desde la cuenta dos, al previo pago de las pensiones de alimentos decretadas respecto del afiliado y alimentante moroso. Así, y mediante la priorización por ley del uso de dichos recursos, contribuiríamos a dar solución continua a la deuda por pensiones de alimentos de manera rápida, justa, efectiva y eficientemente.
- No hacer lo anterior, mantendría siempre la legítima tentación de nuevos proyectos centrados en los retiros para fines alimentarios y que serían de transversal apoyo y segura aprobación, alternativa que mal incentiva el mercado laboral informal o, en su defecto, la declaración parcial y menor de remuneraciones, situaciones que se atenúan fuertemente al despejarse la fórmula de pago de la deuda alimentaria, esto es, mediante el gravamen sólo del exceso de la rentabilidad de nuestros fondos sobre el promedio definido por el legislador.
- En suma, nuestra propuesta logra cumplir los dos objetivos planteados, constituyéndose en una alternativa de cierre virtuoso del mecanismo de los retiros, construyendo, además, un mecanismo para saldar deuda alimentaria morosa presente y futura, garantizando ahorro previsional para la vejez, incluso la del alimentante moroso, desincentivando tentaciones de informalidad o de pago en negro de una parte de las remuneraciones, y potenciando flujos seguros de recursos para el pago de pensiones alimenticias morosas y no morosas, ello dado el carácter de libre disponibilidad que las rentabilidades dichas tendrían a futuro.
- Estamos conscientes que la fórmula expuesta obliga a un cambio radical en los proyectos de quinto (5) retiro de fondos presentados en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero recién iniciada su tramitación ello es perfectamente posible y no incompatible con el derecho a retiro de una parte de nuestros ahorros, derecho que, a nuestro juicio, debe sí contemplar otros dos cambios: a) que efectivamente sea sobre la base del 10% de los fondos y no del 100% como ha terminado siendo en los casos de las personas de menor ahorro, situación que ha llevado a cero sus cuentas de capitalización,



pulverizando ahorro y rentabilidad; b) que carezca de límites o techos cuando el destino de los fondos sea el pago de dividendos hipotecarios o el apalancamiento de recursos para acceder a los mismos, alternativa que se transforma en un calce de activos que no afecta la liquidez del sistema al no contribuir a un mayor flujo de dinero hacia la economía vía un mayor consumo.

- Esperemos nuestra propuesta haga eco en el Gobierno y la oposición, pues el país no está para gustitos personales ni menos para propuestas incapaces de velar por el bien común. Nuestra disposición a lo anterior es total y estoy cierto el resto de mis colegas en el Senado sabrán apreciar ello, de manera que marzo no sea sólo la aparición de un diez por ciento (10%) más.

## **II.- La proyección**

Estamos en una coyuntura particularmente difícil. Por primera vez desde que iniciamos estos informes, la cantidad de entrevistas de fondo cubre una proporción tal de la actividad senatorial, que no queda espacio para hacer referencia a la actualidad regional.

- ✓ Esto quiere decir que la exigencia para fijar posición política se ha convertido en parte muy importante de la agenda, y la agenda política nacional está ocupando cada vez más espacio en la labor senatorial.
- ✓ Esta tendencia se mantendrá todavía más acentuada en los meses siguientes: pasando por la etapa final del trabajo de la Convención la que, por coincidencia, se producirá en su momento clave en la ciudad de Antofagasta cuando sesione, por primera vez, las comisiones de “armonización”, normas transitorias y preámbulo, a mediados de mes.
- ✓ Todo se sincroniza como para motivar a la más activa participación en la etapa siguiente al despacho del texto constitucional por parte del Presidente Boric, dando el punto de partida para la deliberación nacional que antecederá al plebiscito de salida.
- ✓ Hasta ahora se ha hecho un esfuerzo importante tratando de mantener una línea de trabajo regional, tocando los temas de mayor interés en Antofagasta y, otra, bien diferenciada, a nivel nacional, entrando en los debates políticos de mayor calado. Esa división será completamente imposible de conservar por mucho tiempo más.
- ✓ Puesto que el plebiscito dividirá al país completo, a los partidos de centroizquierda también y a los parlamentarios, lo mejor que se puede hacer es fijar posición desde ya.
- ✓ Pero lo que se propone, en coincidencia con un artículo de opinión recién entregado, es posicionarse en desde ya en definición de los criterios tras los cuales se puede decidir apoyar o no la nueva Constitución.
- ✓ Los criterios propuestos son: gobernabilidad, equilibrio de poderes; reconocimiento de derechos ciudadanos; ratificación de la voluntad popular

expresada en las autoridades ya electas; y, posibilidad efectiva de incorporar futuras enmiendas al texto que se apruebe.

- ✓ Este enfoque (concentrarse en los criterios de evaluación, en vez de tomar posición pura y simplemente a favor de una de las dos opciones), permite tener tiempo para evaluar el escenario efectivo que se de en los próximos meses y, si es necesario, poder optar por cualquiera de los dos posibilidades abiertas.
- ✓ Es muy importante insistir en que mientras no se tenga el texto terminado, no se puede saber por anticipado si los criterios escogidos para elegir se han cumplido o no. Siempre se podrá actuar con coherencia con los propios planteamientos.
- ✓ Lo que hay que tener muy presente es que, por ahora, cualquiera de los resultados del plebiscito de salida aparece como igualmente capaz de obtener la mayoría, es más probable el Apruebo, pero esto ha dejado de ser una certeza. Más importante, aun cuando triunfe la opción Apruebo, el debate constitucional quedará tan abierto que la votación no deja para nada concluido el tema.
- ✓ Nos hemos pasado discutiendo sobre la carta fundamental desde 1980 y seguiremos discutiendo sobre el texto constitucional que se apruebe o rechace. Es más, el período en que se deben dictar las normas orgánicas para que la Constitución se aplique será de varios años. Eso sin contar con que a la Convención le resultará imposible dejar definido que nadie le altere el texto aprobado en lo más mínimo.
- ✓ Sin el aterrizaje de las normas la Constitución no se aplica y se aterriza se producen alteraciones y modificaciones. Los parlamentarios tienen mucho que modificar y, a la primera oportunidad, es lo que procederán a hacer.
- ✓ En otras palabras, la intensificación del debate político solo irá en aumento, se combinará con el periodo electoral siguiente y se tenderá a la polarización, luego que la centroizquierda se presente ya permanentemente dividida a partir del plebiscito y sus secuelas.
- ✓ En paralelo, se hará indispensable fortalecer el área de preparación de contenidos para los debates públicos, dada la cantidad enorme de materias que se empezarán a abordar en los más diversos foros. Pero este es un efecto inevitable del mayor protagonismo público que se ha alcanzado en los últimos meses, que no es algo que se pueda abandonar en medio de fuertes debates nacionales.

## Narcotráfico en Chile

Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo el fenómeno del narcotráfico ha evolucionado desde un problema focalizado en algunos barrios de las comunas más populosas de la zona sur de la región Metropolitana caracterizados por una alta presencia de microtráfico, a un fenómeno extendido en todo el territorio nacional, donde predomina la presencia de bandas organizadas con redes en el extranjero -incluso vinculadas a carteles como de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación- y con altos poderes de fuego, que han implicado también una mayor capacidad de producción.

Si bien han existido iniciativas y programas para poder hacer frente a este fenómeno, aún resultan insuficientes. Basta con observar los resultados del último estudio realizado por el Observatorio judicial relativo a los resultados obtenidos a partir de la persecución de los delitos por narcotráfico desde el 2004 hasta el 2021 que ha realizado el Ministerio Público. Los resultados del mismo alertan de la baja eficacia de la persecución en estos delitos, al tiempo que el fenómeno se ha sofisticado y expandido.

*“Al mirar los términos desde una perspectiva temporal encontramos un fenómeno preocupante: en la última década la cantidad de causas que terminan con condena pasó de un 57% a un 34%. Mientras que el archivo provisional aumentó de un 23% a un 44%”. El hallazgo del informe debe llamarnos a una alerta respecto de lo que hoy está ocurriendo al interior del Ministerio Público en relación a los delitos de narcotráfico y qué podría explicar que hoy los fiscales finalicen tempranamente estas investigaciones y no logren porcentajes esperados de condena o al menos no han logrado mantener los niveles de eficacia de años atrás.*

El estudio del Observatorio también establece que los ingresos por causas de narcotráfico han pasado de más de 8.000 al año en 2004 a casi 31.000 el año 2021, o sea, se han multiplicado por 4.

Al sondear respecto de las posibles causas de estos resultados, es importante tener a la vista lo ocurrido desde el año 2013: aumenta el porcentaje de delitos de narcotráfico que ingresan con imputado desconocido. Este fenómeno tendría una correlación directa con la disminución del porcentaje de condenas.

*“A la vista de los antecedentes expuestos es probable que la disminución porcentual de condenas se deba a que la industria del narcotráfico recurre a métodos cada vez más sofisticados para el microtráfico, lo cual impiden identificar al imputado. Frente a esta situación el MP archiva las causas.”*

En este contexto es posible establecer que los desafíos de los entes persecutores deben centrarse en los siguientes aspectos: fortalecer las capacidades de análisis criminal y de levantamiento de información inicial que permitan disminuir los porcentajes de casos con imputados desconocidos; segundo, profesionalizar a los actores atendido el hecho que se trata de un fenómeno que se ha tornado cada vez más sofisticado incluyendo a modo de ejemplo el uso de redes sociales para extender sus mercados, y finalmente, integrar las bases de información de los distintos agentes que pudieran contar con información valiosa a este respecto incluyendo instituciones no solo persecutoras sino también de análisis económico como la Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos y Aduanas por mencionar algunos.

**Condenar – a quienes saqueadores, destruyen infraestructura, incendian buses - y todo tipo de Violencia es un imperativo ético.**

Lo vivido en Talagante, nos hace recordar con vergüenza e indignación lo ocurrido en octubre de 2019, cuando los saqueos parecían estar a la orden del día y eran avalados por algunos sectores amparados en el descontento de la población.

Pero No, No, los saqueos solo responden a una acción criminal de un grupo de delincuentes que busca avalar su accionar en la falta de trabajo o recursos que puede enfrentar un sector de la población afectando principalmente a los más vulnerables.

El saqueo a un supermercado en Talagante no afecta a dicha cadena, sino que afecta a sus trabajadores y sus familias y afecta también a quienes recurrían a dicho centro comercial para adquirir sus bienes.

No, No, el saqueo nunca puede entenderse como la solución a cualquier tipo de necesidad. Con vergüenza vemos como una parte de los chilenos no puede llamarse ciudadano ya que frente a la primera oportunidad aprovecha las complicaciones actuales para cometer robos.

Recuerdo cuando comenzó la guerra en Ucrania como veíamos a una población ejemplar que acudía al comercio por cosas para su subsistencia, sin acaparar, dejando alimentos para sus vecinos y lo más sorprendente es que dejaban el dinero de sus compras en los mostradores para que los dueños luego pudieran recuperarlo. Que ejemplo de ciudadanía donde el bien común está por sobre cualquier otra cosa.

Chile no ha sufrido los horrores de la guerra y esperamos siga siendo así, por ello es que mirar al exterior debería motivarnos a ser buenos ciudadanos, pero parece que es así, pareciera que ante cualquier descontento creemos que la violencia y delincuencia es el camino. No, no es el camino.

Tal como dijo el alcalde de Talagante Carlos Álvarez, el saqueo es “un hecho delictual puro y simple, que genera calamidad pública en nuestros vecinos y vecinas, genera intranquilidad, genera molestia, genera malestar. En definitiva, un grupo reducido, 100-200 personas, sigue siendo reducido, nosotros somos más de 87 mil habitantes, cometen esta tropelía que a mi juicio no tiene ninguna justificación”.

Concuerdo con sus dichos y apoyo el hecho que este es un sector minoritario de chilenos a quienes debemos castigar como ciudadanos que buscamos un país mejor, un país con un mejor futuro para nuestros hijos, un país donde prime el bien común y donde todos podamos crecer en tranquilidad.

El saqueo es vergonzoso y ni siquiera responde a la necesidad de alimentación, de sobrevivencia, cuando vemos que lo robado son televisores y aparatos electrónicos volvemos a reconocer con vergüenza que hay quienes buscan cualquier excusa para robar y amenazar la tranquilidad.

Condenemos los saqueos, los desmanes y cualquier tipo de violencia que solo busca generar caos y avalar la delincuencia. Somos muchos más los chilenos de bien, ciudadanos que miramos al futuro con esperanza y que creemos que el buen accionar rinde mejores frutos.

## **Por una Constitución en beneficio de Chile y su gente**

Para cuando se inicie el debate constitucional en el plebiscito de salida, la Convención será parte del pasado. La opinión que cada uno de nosotros tenga sobre su desempeño carecerá de importancia, si algo no nos gustó o quedan explicaciones que dar, ya de nada servirá porque no tendremos a quién dirigirnos. Lo que quedará y lo que deberá ser sólido y consistente es un texto de borrador de la Constitución que deberá explicarse por sí mismo.

Esto me parece relevante en vista de lo que resolveremos como nación a partir del momento en que el Presidente de la República publique en el Diario Oficial el fin del proceso constituyente y el inicio del debate sobre el texto que votaremos el 4 de septiembre.

Es decir, lo que tendremos es un texto y lo que no tendremos es una instancia donde hacer reclamos. Se tratará de un producto que habrá que tomar o dejar, pero al que ya no será posible incorporarle modificaciones o enmiendas.

Soy uno más entre muchos que participó en la resolución de aprobar el cambio constitucional a través del proceso que esta siendo implementado. Cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión en conciencia, analizar la propuesta y defender un articulado que fue preparado tras varios meses de elaboración. Lo que ninguno de nosotros podrá hacer es votar sin haber argumentado, ya sea a favor o en contra.

Jamás he llegado a emitir mi voto sin un previo análisis de los puntos importantes y después de haberme formado la convicción de estar haciendo lo mejor. Cuando se quiere actuar correctamente, lo que cada uno de nosotros debe hacer es adelantar los criterios con los cuales va a evaluar aquello que se nos presente.

A mi parecer los criterios básicos para votar positivamente la nueva Constitución son cinco: Fortalecer la gobernabilidad del país; lograr un adecuado equilibrio de poderes; asegurar el reconocimiento de los derechos ciudadanos; ratificar la voluntad popular ya expresada; y, hacer posible las futuras enmiendas del texto.

Una gran falencia que ha tenido nuestra democracia se relaciona con la gobernabilidad. Hay un amplio consenso en aspirar a que nuestra Constitución posibilite que se conformen gobiernos con respaldo mayoritario en las urnas y en el Congreso, evitando las administraciones con apoyo minoritario, lo que siempre será sinónimo de inestabilidad.

También es amplio el acuerdo en que tenemos un presidencialismo exacerbado que predomina sobre un Parlamento con menores atribuciones a las deseables. Por lo mismo, importa avanzar a establecer un doble equilibrio: entre el Presidente y el Congreso y, también, al interior del Parlamento, entre las dos cámaras, en una de las cuales se representa a la ciudadanía en proporción a su número y la otra en que las regiones pueden expresar con peso suficiente sus puntos de vista. Solo así la descentralización del poder que necesitamos se verá favorecida por la arquitectura constitucional.

En seguida, es indispensable que todos los derechos de las personas y de las comunidades sean reconocidos en la carta fundamental, en una versión actualizada cubriendo aspectos que hace unas décadas no tenían suficiente visibilidad y otras que el desarrollo científico y social han hecho evidentes. Por cierto, tal actualización no ha de hacerse en detrimento de los derechos ya suficientemente establecidos.

Por supuesto, se trata de avanzar en el ejercicio de la voluntad popular, no de desandar camino. Aquello que el pueblo ya decidió, no debe ser enmendado por nadie. Elegimos a un Presidente y a un Congreso por períodos establecidos y eso ya ha sido definido en votación popular. Las normas transitorias han de reconocer esta realidad.

Por último, ya hemos padecido por largo tiempo el intento de la dictadura de contar con una Constitución pétrea, que nadie pudiera alterar, no importando el tiempo que pasara. Al contrario, el mismo texto constitucional ha de hacer posible que nuestra carta fundamental incorpore todas las mejoras y enmiendas que el transcurso de los años hagan evidentes.

Lo que he señalado me parecen condiciones básicas para aprobar la Constitución y es en base a estos criterios que procederé a analizarla. Así podré estar seguro de estar cambiando un conjunto de reglas del juego por otras que resulten mejor para Chile. Aconsejo a todos los ciudadanos responsables decidir en el plebiscito fundamentando su voto según los criterios que a cada cual le parezcan pertinentes en bien del país y su gente.